

Rdo
fructuoso
30/08/2019
29 fls

ORIGINAL
PÁGINA 1

Señores:

**JUZGADO SEGUNDO (2) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MOCOA,
PUTUMAYO.**

E.

S.

D.

CONTESTACIÓN DEMANDA.

RADICADO: 860013340002-2019-00088
MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA.
DEMANDANTE: YEISON FERNANDO YAQUENO MATABAJOY y OTROS.
DEMANDADOS: ESGAMO LIMITADA INGENIEROS CONSTRUCTORES y OTROS.

HELBERT RENÉC CORTÉS JARA, identificado civil y profesionalmente con la cédula de ciudadanía número 19.353.219 expedida en la ciudad de Bogotá D.C., departamento de Cundinamarca y tarjeta número 71771 proferida por el Consejo Superior de la Judicatura, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., departamento de Cundinamarca, actuando en mi calidad de Apoderado Judicial Especial de la sociedad comercial denominada **ESGAMO LIMITADA INGENIEROS CONSTRUCTORES**, entidad legalmente constituida, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., departamento de Cundinamarca, según poder adosado, manifiesto que a través del presente escrito, doy contestación a la demanda instaurada por **YEISON FERNANDO YAQUENO MATABAJOY y OTROS**, por intermedio de su apoderado judicial especial, en los siguientes términos:

1. EN CUANTO A LAS DECLARACIONES Y CONDENAS.

A la número 1.1. Me opongo, en razón en que ni a mi representada, ni ninguna de las demás demandadas se le puede endilgar responsabilidad alguna en los hechos que dieron como consecuencia la muerte de la menor ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ.

A la número 1.2. Me opongo, porque derivado de la inexistencia de responsabilidad señalada en el numeral anterior, es mucho menos posible condenar a mi representada y a las demás demandadas al reconocimiento y pago de los perjuicios e indemnizaciones que se señalan a continuación.

A la número 1.3. **PERJUICIOS INMATERIALES-**

Daño Moral.

- a) Me opongo, en razón a que el resultado dañoso de la muerte de la menor ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ no es otro qué consecuencia de su negligencia, imprudencia, impericia y violación de reglamentos en la conducción del automotor que esta presuntamente manejaba al momento del deceso.



- b) Me opongo, en razón a que el resultado dañoso de la muerte de la menor ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ no es otro qué consecuencia de su negligencia, imprudencia, impericia y violación de reglamentos en el manejo del automotor que esta presuntamente conducía al momento del deceso.
- c) Me opongo, en razón a que el resultado dañoso de la muerte de la menor ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ no es otro qué consecuencia de su negligencia, imprudencia, impericia y violación de reglamentos en la conducción del automotor que esta presuntamente trasladaba al momento del deceso.

A la número 1.4. Me opongo, en razón a que el resultado dañoso de la muerte de la menor ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ no es otro qué consecuencia de su negligencia, imprudencia, impericia y violación de reglamentos en la conducción del automotor que esta presuntamente transportaba al momento de su muerte.

A la número 1.5 **PERJUICIOS MATERIALES**

a) **Daño emergente consolidado:**

Me opongo, porque los documentos aportados en el acápite de la referencia y señalados como facturas de venta, no cumplen en modo alguno las exigencias determinadas taxativamente en el artículo 774 del Código de Comercio y mucho menos en la ley 1231 de 2008; ni tampoco

Contienen prueba alguna de quien efectuó tales erogaciones o realizó tales adquisiciones.

b) **Lucro cesante futuro no consolidado:**

Me opongo, pues el fundamento de esta pretensión está basado única y exclusivamente en una certificación que inexplicablemente fue obtenida por parte de una empresa de energía, sin que en la misma, se soporte la validez; ni mucho menos la oportunidad para que dicha entidad sea certificadora de los supuestos o presuntos ingresos obtenidos a futuro por parte de la occisa.

A la tercera (sic): En razón a que no existe de manera antecedente y en el cuerpo de la demanda, los ordinales **primera** y **segunda**.

Me opongo, en razón a que el resultado dañoso de la muerte de la menor ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ no es otro qué consecuencia de su negligencia, imprudencia, impericia y violación de reglamentos en la conducción del automotor que esta presuntamente dirigía al momento de su deceso.

A la cuarta (sic): Me opongo, en razón a que el resultado dañoso de la muerte de la menor ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ no es otro qué consecuencia de su negligencia, imprudencia, impericia y violación de reglamentos en la conducción del automotor que esta presuntamente conducía al momento del deceso.



A la quinta (sic): Me opongo, en razón a que el resultado dañoso de la muerte de la menor ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ no es otro qué consecuencia de su negligencia, imprudencia, impericia y violación de reglamentos en la conducción del automotor que esta presuntamente transportaba al momento de su deceso.

A la sexta (sic): Me opongo, en razón a que el resultado dañoso de la muerte de la menor ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ no es otro qué consecuencia de su negligencia, imprudencia, impericia y violación de reglamentos en el manejo del automotor que esta presuntamente conducía al momento del deceso.

A la séptima (sic): Me opongo, en razón a que el resultado dañoso de la muerte de la menor ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ no es otro qué consecuencia de su negligencia, imprudencia, impericia y violación de reglamentos en la conducción del automotor que esta presuntamente conducía al momento del deceso.

A la octava (sic): Me opongo, pues dicha condena debe ser fulminada en contra de los demandantes, única y exclusivamente, por la temeridad con la cual adelantan la presente acción.

3. EN CUANTO A LOS HECHOS.-

Al hecho número 3.1. No me consta, que se pruebe, pues no existe prueba que la misma se desplazara al momento del fatídico, ocupando un vehículo motocicleta, desconocemos de igual manera; el sentido de la vía en que se dirigía presuntamente, ignoramos también si ella perdió el control del velocípedo como se afirma y si fue como consecuencia de la presencia en la vía de un hueco y esa fue la causa que la misma se precipitara al suelo.

Al hecho número 3.2. No me consta, que se pruebe, pero ésta misma descripción, le da fuerza probatoria a lo señalado por nuestra parte en la respuesta ofrecida al hecho inmediatamente anterior.

En cuanto a la referida inexistencia de señalización vial de trabajos en la vía, dicha afirmación queda igualmente sin piso jurídico; pues en las fotografías aparecen balizas a lo largo del trayecto en el cual se desarrollaban los trabajos de reparcho.

Al hecho número 3.3. No me consta, que se pruebe, pues por lo sostenido por mi parte a lo largo del escrito responsivo debo señalar una vez más que no existe prueba real de la trayectoria de la motocicleta, ni del presunto hueco donde quedo la víctima.

Al hecho número 3.4. No me consta, que se pruebe, pues ninguna de esas afirmaciones ha sido fruto de controversia procesal y simplemente obedece a una observación unilateral del funcionario.

Al hecho número 3.5. No me consta, que se pruebe, pues ninguna de esas afirmaciones ha sido fruto de controversia procesal y simplemente obedece a



una observación unilateral del funcionario. Con respecto al supuesto accidente e itero una vez más que no es cierta la afirmación de la inexistencia de señalización vial de trabajos en la vía, pues queda sin piso jurídico con el contenido de las fotografías correspondientes al ACTA DE INSPECCIÓN A LUGARES existente dentro del plenario en donde hacen presencia balizas desde el inicio y a lo largo del trayecto en el cual se desarrollaban los trabajos de reconstrucción.

Al hecho número 3.6. No me consta, que se pruebe, pues como se afirma en el mismo hecho al cual aquí se da respuesta "posible punto de impacto", todo lo señalado aquí obedece a una simple presunción de la ocurrencia de los hechos.

Al hecho número 3.7. No me consta, que se pruebe, dicha afirmación queda sin piso jurídico; pues en las fotografías correspondientes al ACTA DE INSPECCIÓN A LUGARES existente dentro del plenario hacen presencia balizas desde el inicio y a lo largo del trayecto en el cual se desarrollaban los trabajos de reconstrucción.

Al hecho número 3.8. No me consta, que se pruebe, pues ninguna de esas afirmaciones ha sido fruto de controversia procesal y simplemente obedece a una observación unilateral del funcionario.

Al hecho número 3.9. No me consta, que se pruebe, pues son afirmaciones totalmente ajenas a mi representada.

Al hecho número 3.10. No me consta, que se pruebe, pues son afirmaciones totalmente ajenas a mi representada.

Al hecho número 3.11. No me consta, que se pruebe, pues son afirmaciones totalmente ajenas a mi representada.

Al hecho número 3.12. No me consta, que se pruebe, pues son afirmaciones totalmente ajenas a mi representada.

Al hecho número 3.13. No me consta, que se pruebe, pues son afirmaciones totalmente ajenas a mi representada.

Al hecho número 3.14.- Seniega, pues para la fecha de la ocurrencia del presunto accidente de tránsito el contrato 3378 de 2007 ya había sido finalizado.

Al hecho número 3.15. No me consta, que se pruebe, pues las descripciones efectuadas en el hecho al cual aquí se da respuesta se encuentran fuera del ámbito de operación de mi representada.

Al hecho número 3.16. No me consta, que se pruebe, pues son afirmaciones totalmente ajenas a mi representada.

Al hecho número 3.17. Se niega, pues desconocemos a que hacen relación los demandantes por medio de su apoderado judicial especial cuando refieren la colocación de mezclas "fácticas".



Al hecho número 3.18. No me consta, que se pruebe, pues las circunstancias allí precisadas no corresponden en modo alguno a la ejecución de las obras contratadas.

Al hecho número 3.19. No me consta, que se pruebe, pues las circunstancias allí precisadas no corresponden en modo alguno a la ejecución de las obras contratadas.

Al hecho número 3.20. No me consta, que se pruebe, pues son afirmaciones carentes al momento de prueba que así lo demuestre. Desconocemos a la fecha la existencia de la Unión Temporal Puerto Caicedo – Puerto Umbria.

Al hecho número 3.21. No me consta, que se pruebe, pues son afirmaciones carentes al momento de prueba que así lo demuestre.

Al hecho número 3.22. No me consta, que se pruebe, pues son afirmaciones carentes al momento de prueba que así lo demuestre. Desconocemos a la fecha la existencia de la Unión Temporal Puerto Caicedo – Puerto Umbria.

Al hecho número 3.23. No me consta, que se pruebe, pues es totalmente diferente el momento contractual de terminación de las obras contratadas y el momento de la elaboración del acta de entrega definitiva.

Al hecho número 3.24. No me consta, que se pruebe, pues no existe al momento demostración alguna mediante la cual se compruebe que fueron los hallazgos efectuados la consecuencia del supuesto accidente de tránsito que aquí se investiga.

Al hecho número 3.25. Se niega, pues al momento lo que se ha demostrado es que el resultado dañoso es únicamente consecuencia de la negligencia, imprudencia e impericia junto a la violación de reglamentos por parte de la menor, quien sin estar acreditada su capacidad legal para operar dicho rodante y sin el uso mínimo de la protección necesaria para dicha operación conducía el automotor al momento del accidente de marras.

Al hecho número 3.26. Se niega, pues cualquier medida tomada por las demandadas sería poca ante la conducción irresponsable de una menor carente de las habilidades y conocimiento legales para la conducción del referido automotor, sumado a que al momento del accidente y en las diligencias posteriores se comprueba fehaciente que la occisa no portaba los elementos de protección requeridos para el manejo de la motocicleta en cuestión.

Al hecho número 3.27. Se niega, pues ninguna de las medidas tomadas por las entidades demandadas en forma directa o indirecta hubiese podido evitar el despliegue del comportamiento irresponsable de una menor sin licencia para conducir y sin el porte de los elementos de protección, la cual no acredita tampoco el conocimiento básico de las señales de tránsito por parte de la obitada.

Al hecho número 3.28. No me consta, que se pruebe, pues las circunstancias descritas en el hecho al cual aquí se da respuesta se encuentran por fuera del objeto social de mi defendida.



Al hecho número 3.29. No me consta, que se pruebe, pues las circunstancias descritas en el hecho al cual aquí se da respuesta se encuentran por fuera del objeto social de mi defendida.

Al hecho número 3.30. No me consta, que se pruebe, pues las circunstancias descritas en el hecho al cual aquí se da respuesta se encuentran por fuera del objeto social de mi defendida.

Al hecho número 3.31. No me consta, que se pruebe, pues las circunstancias descritas en el hecho al cual aquí se da respuesta se encuentran por fuera del objeto social de mi defendida.

Al hecho número 3.32. No me consta, que se pruebe, pues las circunstancias descritas en el hecho al cual aquí se da respuesta se encuentran por fuera del objeto social de mi defendida.

Al hecho número 3.33. No me consta, que se pruebe, pues las circunstancias descritas en el hecho al cual aquí se da respuesta se encuentran por fuera del objeto social de mi defendida.

Al hecho número 3.34. No me consta, que se pruebe, pues las circunstancias descritas en el hecho al cual aquí se da respuesta se encuentran por fuera del objeto social de mi defendida.

Al hecho número 3.35. No me consta, que se pruebe, por lo abstruso e ininteligible de su redacción.

EXCEPCIONES.

PERENTORIAS O DE FONDO.

1. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN.

Determinando que para el cabal ejercicio del medio de control denominado reparación directa, la ley establece el término de dos (2) años que se deben contar en este caso al día siguiente a la ocurrencia del hecho, esto es el día Veintiséis (26) de Octubre de 2016, cuyo plazo vencía el día Veinticinco (25) de Octubre de 2018, y teniendo en cuenta que el requisito de conciliación previa tuvo lugar entre el Dieciséis (16) de Octubre de 2018 y el Diecinueve (19) de Diciembre de la misma anualidad, tiempo durante el cual el fenómeno de la caducidad se encontraba en suspenso y que a la finalización de dicho procedimiento le restaban aproximadamente diez (10) días, para tal efecto, los cuales continuaban contándose a partir del día Veinte (20) de Diciembre de 2018 y el auto admisorio de la presente demanda se dio solo hasta el día Trece (13) de Mayo de 2019, momento para el cual ya habían transcurrido el tiempo suficiente para que operara el fenómeno procesal en comento.

2. CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA.

Fundamentado en que la Ley de tránsito nacional reconoce la pericia, la prudencia, la diligencia y la observación de reglamentos a aquella persona que acredite el trámite y obtención de la licencia de conducción, documento que en



momento alguno se acredita en cabeza de la occisa. Adicionalmente no podemos olvidar que todos los conductores de motocicletas y ciclomotores, así como sus acompañantes, están obligados a llevar el casco protector en la cabeza en cualquier vía urbana e interurbana del país.

Aunado a lo anterior no se puede desconocer que la licencia de conducción, es un elemento que da idoneidad o capacidad a las personas para conducir automotores y que el accidente se produjo porque la occisa omitió el deber objetivo de cuidado al que se encontraba obligada por tratarse de la ejecución de una actividad peligrosa, como lo es, la conducción de una motocicleta, resaltando que ella conocía del peligro que ya existía en esa zona y conocía el riesgo que representaba ese sitio, pues como los mismos demandantes lo reconocen en el libelo introductorio, frecuentemente, ella transitaba por esta vía, inobservando las normas de tránsito establecidas para tal efecto.

3. INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN.

Pues el resultado fue consecuencia única y exclusivamente de la conducción de un vehículo automotor por parte de una persona menor de edad, y sin contar la misma, con la autorización legal para dicha operación y sin el porte mínimo de los elementos de seguridad señalados para la operación segura de dichos vehículos.

4. COBRO DE LO NO DEBIDO.

Fundamentado en lo señalado en todas y cada una de las excepciones determinadas anteriormente.

5. BUENA FE.

La demandada, en consecuencia, no está en la obligación de reconocer, ni pagar a aquéllos suma de dinero alguna en su favor por acreencias por concepto de las pretensiones existentes en la demanda.

De otra parte, porque la constitución Nacional señala que las actuaciones de los particulares se presumen de buena fe, y lo que se hace indispensable es demostrar lo contrario, cosa que a lo largo del escrito introductorio no sucede.

NIEGO EL DERECHO QUE INVOCAN LOS DEMANDANTES, PORQUE NO SON CIERTOS LOS HECHOS EN QUE PRETENDEN FUNDAMENTARLO.

RAZONES DE LA DEFENSA

Dentro del presente proceso nos encontramos con la intención bien definida por parte de los demandantes de tratar de obtener a toda costa el reconocimiento y pago de unas pretensiones de carácter económico, fundamentados básicamente en señalar que a consecuencia de adelantamiento de unas obras en la vía y la supuesta falta de señalización en ese sitio, se presentó el inesperado deceso de la menor, quien presuntamente conducía una motocicleta, tratando con ello desviar la atención del funcionario de conocimiento, en relación a tener como preponderante y como consecuencia única del resultado dañoso, los hechos consistentes en que la conductora para



ese momento no contaba con el requisito de portar una licencia de conducción que la acreditara como persona perfectamente idónea para la conducción de ese tipo de vehículo y que la misma, inexplicablemente, en ese instante tampoco portaba el mínimo de los elementos de seguridad para la operación de la misma.

El hecho que la occisa haya resuelto conducir sin licencia de conducción constituye la única causa eficiente, idónea y decisiva en la producción del accidente que terminó con su vida, adicionalmente, no se puede pasar por alto lo evidenciado en las fotografías aportadas al plenario donde se evidencia sin duda alguna, la existencia de las balizas puestas a lo largo del trayecto en el cual se desarrollaban los trabajos de reparcheo.

De otra parte quedó demostrado que la víctima al momento de la ocurrencia del accidente no portaba el caso protector en su cabeza y que siendo la causa de su muerte un trauma craneoencefálico, este pudo, haber sido contrarrestado si se hubiese estado utilizando en ese momento dicho elemento de protección, lo cual comporta violaciones al Código Nacional de Tránsito.

Por consiguiente el daño deprecado no puede ser atribuido a ninguna de las entidades demandadas de manera concurrente con la perjudicada directa, habida cuenta que éste obedeció a la culpa exclusiva de la víctima, circunstancia que las exonera de toda responsabilidad, motivo por el cual se debe absolver a mi representada y a las demás vinculadas al proceso en calidad de demandadas.

De otra parte, sorprende a ésta defensa la inexistencia de un experticio técnico practicado sobre el rodante presuntamente conducido por la occisa y en el cual se pueda demostrar adicionalmente que el mismo para el momento de la supuesta ocurrencia del hecho dañoso no se encontraba a plenitud de sus requisitos de funcionamiento

PRUEBAS

Documentales.

Certificado de Existencia y Representación legal de mi prohiada.
Copia de Audiencia de Conciliación Prejudicial ante la Procuraduría.
Copia de derecho de petición con destino a la Fiscalía General de la Nación.
Copia de radicado del derecho de petición ante la Fiscalía General de la Nación.
Copia del acuerdo de la Unión Temporal Puerto Caicedo.

ANEXOS

Certificado de Existencia y Representación legal de mi prohiada.
Copia de Audiencia de Conciliación Prejudicial ante la Procuraduría.
Copia de derecho de petición con destino a la Fiscalía General de la Nación.
Copia de radicado del derecho de petición ante la Fiscalía General de la Nación.
Copia del acuerdo de la Unión Temporal Puerto Caicedo.

NOTIFICACIONES

A los demandantes en la dirección que indican en el escrito introductorio.



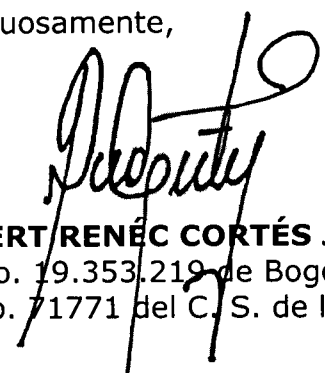
A las demandadas en la dirección señalada para cada una de las mismas en el líbello demandatorio.

Al suscrito en la Secretaría de su despacho o en mi Oficina particular de Abogado ubicada en la Carrera Séptima número 17 - 01, Oficina 409 del Edificio Colseguros de la Carrera Séptima. Bogotá D.C.

Teléfono fijo 2 81 69 79 y Móvil 311 810 66 12.

Dirección electrónica. gerentejuridico@ayserv.com

Respetuosamente,



HELBERT/RENÉC CORTÉS JARA.
C.C. No. 19.353.219 de Bogotá D.C.
T.P. No. 71771 del C. S. de la J.

